



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 91788/2016

AUTOS: “ZOTO, SERGIO JAVIER c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 64/69 contra la resolución N° DRF 9986 que desestimó el recurso de impugnación administrativo deducido contra la Resolución N° DRF 10346/2014 obrante a fs. 41/45 que impuso una multa al actor, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se le hizo saber que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif.

Que a fs. 74 se ordenó la elevación de las actuaciones a esta Alzada sin informar si la contribuyente depositó la suma reclamada.

Que sin perjuicio de ello, surge de las actuaciones que el accionante cumplió con el requisito del pago previo de la multa impuesta, atento que a fs. 70 obra la boleta de depósito correspondiente a la deuda que se le imputa. (Conf. art. 15 de la ley 18820).

Que el presente tiene su origen en el acta de relevamiento efectuada en el domicilio de la calle 9 de julio 687 1er piso de la ciudad de Córdoba capital donde funciona una clínica odontológica con nombre de fantasía C-MED. Según las constancias de fs. 1/2 se procedió a relevar a las personas que se encontraban en el lugar, siendo atendidos por la Sra. Hebe Sol Perazolo en su carácter de odontóloga de la institución. Allí se encontraban además, Maria Belen Picco, y Maria Cecilia Bertazzi Nieto, también de profesión odontólogas.

Que ante el traslado conferido al Sr. Sergio Javier Zoto, tanto en el acta de audiencia de descargo como en el escrito impugnatorio y en los agravios de su apelación el mismo destaca que los trabajadores relevados no tienen con él relación de dependencia alguna. Sostiene que los nombrados son trabajadores independientes con su debida registración en AFIP. Afirma que comparte con ellos un espacio físico donde se encuentran los consultorios y que la relación que los une es netamente profesional. Que ello es así pues abonan entre todos proporcionalmente los gastos que insume el mantenimiento de la estructura del espacio que comparten para ejercer su profesión de odontólogos.

Que al efectuar su descargo además acompaña documental referida a las personas relevadas que dan cuenta que las mismas se encuentran inscriptas como monotributistas en diversas categorías. También agrega declaraciones juradas donde los involucrados manifiestan trabajar en forma independiente y que no los une con el actor ningún tipo de relación de dependencia; constancias de matriculas profesionales y facturas.

Que al momento de evaluar la defensa opuesta, el organismo invoca la presunción consagrada en el art. 23 de la ley 20.744, destacando que en el acto inspectivo las personas se encontraban desarrollando tareas e informaron fecha de ingreso, días y horas de trabajo.

Que al respecto ha de señalarse, en primer lugar, que la presunción del art. 23 de la L.C.T. no es operativa cuando quien alega la condición de trabajador lo hace respecto de un profesional universitario, ya que en la hipótesis no se dan las razones que



permitan erigir el contrato de trabajo como modelo normal de contratación, desde que tales profesionales pueden comprometer sus servicios tanto a través de contratos de trabajo, como locación de obra, como de mandato, y ello determina la inexistencia de un modelo al que remitirse en los casos ambiguos (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 26.07.91, "Zareg, Alcira c/ S.B.A.").

Que en tales condiciones, cuando de profesiones liberales se trata, la determinación de la existencia de relación de dependencia dependerá de las alternativas probatorias disponibles, no resultando acertado partir de premisas fijas, sino del análisis de la particular situación en cada caso.

Que en este sentido, no ha de perderse de vista que el actuar de la administración no puede subsumirse en una mera revisión contable, pues ello importaría una inversión en la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, "Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social, pág. 104 y ss.). La presunción "juris tantum" de la existencia de la relación laboral en sentido estricto, como tal, debe verificarse al extremo, pues ello fundará una decisión administrativa de neto corte punitivo. En ese actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevando a cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, "Cooperativa de Provisión para Puesteros La Armonía").

Que de las constancias obrantes en autos, surge que el organismo no verificó la existencia de un verdadero un poder disciplinario del contribuyente respecto de los profesionales mencionados y tampoco cómo era el desenvolvimiento efectivo de los mismos o la existencia de servicios presentados en otros ámbitos de la salud. Además existe en autos abundante prueba documental que da cuenta de los dichos del accionante y que no han sido objetadas por la administración, ni intrínseca ni extrínsecamente.

Que por expuesto, consideramos que corresponde revocar la resolución administrativa cuestionada y ordenar la devolución del depósito ingresado en cumplimiento de los arts. 9 de la ley 23.473, 15 de la ley 18.820 y 39 bis del Decreto Ley 1285/58, con más el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia que publica el BCRA.

Que por ello, el Tribunal **RESUELVE** : 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar la resolución cuestionada; 2) Ordenar la devolución de las sumas depositada en cumplimiento del requisito de pago previo con más el interés que surja de aplicar la tasa pasiva BCRA ; y 3) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la publicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 10/25 y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)

